Gobierno del CHACO

DM

DICTAMEN N.° 910

REF: ACT. ELECT. E7-2024-656-AE S/RECURSO JERARQUICO Y/O REVISIÓN, ABOG. MARCELO CARLOS ZALAZAR C/DTO. N.° 208/2024.

DE: ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO
PROVINCIA DEL CHACO
SECRETARIA LETRADA
DRA. MARIA FERNANDA KNIAZ

A: DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIZACIÓN
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
PROVINCIA DEL CHACO

De mi consideración:

Reingresa la actuación de referencia a este organismo asesor a efectos de emitir dictamen en relación al recurso jerárquico y/o revisión obrante en la e-parte 1, presentado en fecha 29/02/2024, por el Sr. Marcelo Carlos Zalazar - DNI N.° 23.805.579, agente del Departamento de Evaluación Reglamentaria y Tramites de la Dirección de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Tránsito, dependiente del Ministerio de Seguridad -antes del Ministerio de Gobierno y Justicia-, contra el Decreto Provincial N.° 208/2024 de fecha 23/02/2024.

Con carácter previo a la consideración del planteo recursivo impetrado, corresponde reseñar que dada la excusación planteada por la Sra. Asesora General de Gobierno - Dra. María Alejandra Ferreyra, conforme decreto N.° 664/2024, quien analizará el planteo recursivo y emitirá el pertinente dictamen legal será la Sra. Secretaria Letrada de la Asesoría General de Gobierno, expresamente autorizada para dicho cometido, a fin de garantizar la trasparencia y equidad en la decisión a adoptar.

I.- Ahora bien, efectuada la aclaración precedente, corresponde expedirme en relación a la admisibilidad formal del recurso incoado: En este punto examinados los antecedentes del caso, surge que el remedio recursivo fue articulado en tiempo y forma oportuna, motivo por el cual a continuación me abocaré a considerar la cuestión de fondo planteada.

El decreto cuestionado en e-parte 1, en su art. 1°, expresa: *"Déjase sin efecto el Decreto N.° 3651/23, en los términos de los artículos*

127° y 128° de la ley N.° 179-A, Código de Procedimientos Administrativos, por los motivos expuestos en los Considerandos del presente instrumento legal, y en un todo de acuerdo con el Dictamen N.° 18/24 de la Comisión Revisora, creada por Decreto N.° 13/23".

Por su parte, el decreto N.° 3651/2023, de fecha 07/12/2023, en su art. 1°, reza: *"Promuévase, a partir de la fecha del presente decreto, a los agentes detallados en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo de Jefe de Departamento -Categoría 3 -Personal Administrativo y Técnico Apartado b) -Grupo 1 CEIC 1015 o CEIC 1016 según corresponda, en las oficinas allí consignadas, de conformidad con los fundamentos enunciados en los considerandos del presente";* y en su art. *2°: "Déjanse sin efecto, a partir de la fecha del presente Decreto, en los casos que correspondan, las designaciones en forma provisoria y subrogante de los agentes promovidos por el presente instrumento y las bonificaciones que en cada caso corresponda, atento la medida establecida en el Artículo 1° y de acuerdo con los fundamentos expuestos en los Considerandos del presente".*

En primer lugar, puede advertirse que en e-parte 37, obra providencia N.° 968/2024 de la AGG, donde se requiere a la Unidad de Recursos Humanos del área, que arbitre los medios necesarios a efectos de poner a disposición del reclamante, las actuaciones completas para su vista.

a).- Antecedentes: La recurrente inicia su pretensión recursiva efectuando un detalle de los antecedentes que motivaron el dictado de los decretos que suscitan su presentación, Números 13/23, 3651/23 y 208/24.

En e-parte 1, obra copia de Recurso Jerárquico y/o de Revisión, presentado por el reclamante.

En e-parte 2, se agrega providencia N.° 851/24 de la AGG.

En e-parte 3, obra copia de presentación del reclamante.

En e-parte 4, obra informe de la unidad de RRHH del Ministerio de Seguridad.

En e-parte 5, se agrega providencia N.° 917/24 de la AGG.

En e-partes 6/11, obra documentación que no se corresponde con el recurrente, por lo que no será tenida en cuenta.

En e-parte 12, se agrega dictamen de la Comisión Revisora N.° 18/24 (que si se relaciona) y, antecedentes que no tienen relación con la recurrente, por lo que no será tenida en cuenta.

En e-partes 13/26, obra documentación que no se corresponde con el recurrente, por lo que no será tenida en cuenta.

En la e-parte 27, se agrega nota de la Dirección Control Liquidación de Haberes de la D.G.RR.HH, en la que informa "...en respuesta a lo solicitado en lo actuado, respecto a así los agentes mencionados en el Decreto 3651/23 han percibido haberes correspondientes a los meses de 12/2023 y 1/2024 como titulares en los cargos según decreto Ut- Supra mencionado, esta Dirección Control de Liquidación de Haberes, informa que NO, ya que se no se visualizan modificaciones en el Sistema de Liquidación de Haberes, respecto a los cargos."

En la e-parte 30, se agregan antecedentes que no tienen relación con la recurrente, por lo que no serán tenidos en cuenta; y dictamen N.° 031/2024 de fecha 20/02/2024, de Fiscalía de Estado (que si se relaciona).

En e-parte 31, obra copia de Decreto 208/2024.

En e-parte 37, por providencia N.° 968/24, la AGG, corre vista de las actuaciones al recurrente.

En la e-parte 38, se agrega Ampliación de Fundamentos presentado por el sr. Zalazar, en fecha 14/10/2024.

En e-parte 40, obra providencia N.° 989 de la AGG se solicita informe respecto al carácter de sus haberes.

En e-parte 41, la Dirección Control Liquidación de Haberes. D.G.RR.HH, informe que "...el agente Zalazar Marcelo Carlos DNI N.° 23.805.579 percibió en los periodos solicitados de Diciembre de 2023, Enero 2024 y Febrero 2024 y percibe sus haberes hasta la actualidad EN CARÁCTER DE SUBROGANTE, mediante Decreto N.° 2198/14 desde fecha 01/06/2014, lo cual es verificado mediante el Sistema Integrado de Liquidación de haberes -PON- y mediante el Departamento de Auditoria de Liquidaciones de esta Dirección."

b).- Manifestaciones genéricas formuladas en el recurso: Refiere en primera instancia a que el Decreto N.° 208/24 socaba sus derechos constitucionales- patrimoniales por haber ingresado al ámbito de su propiedad porque ya han generado derechos subjetivos en su favor, como la percepción de los haberes con la liquidación correspondiente al cargo jerárquico cuya situación de revista ya vengo ejerciendo desde el año 2014.

Que ha percibido similares haberes –con liquidación del cargo titularizado- en los meses posteriores al dictado del Dcto. N.° 3651/23, dichos derechos subjetivos ya han ingresado a su patrimonio con la percepción de los haberes de diciembre de 2023, de enero de 2024 y de febrero de 2024, resultando por ello, lo requerido, ajustado a derecho.

El dictado del Decreto cuestionado por el agente, encuentra fundamento en el análisis pormenorizado y detallado que ha llevado a cabo la Comisión Revisora en los términos del Decreto 13/23.

Cabe Indicar sobre la legalidad y/o legitimidad del Decreto N.° 13/23, debe tenerse presente, además de los fundamentos expuestos en este punto, el hecho real y concreto de que el Poder Judicial de la Provincia, *ha desestimado las acciones judiciales promovidas contra el mismo declarándolo legítimo. (en autos "Vandi, Valeria Vanina c/ Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco s/Acción de Amparo" Expte. N.° 13531/23 Sala I en los C. y C.),* ello sin perjuicio de la extemporaneidad de cualquier impugnación al mismo en este tiempo e instancia y por lo tanto indiscutida.

Por otro lado, respecto de lo que obra agregado como instrumentos legales de otros agentes y/o como documental en estos actuados y que no guardan relación con el recurrente y su recurso, cabe resaltar que las mismas no fueron tenidas en cuenta en el presente dictamen, no obstante, no haberse desglosado de la presente actuación electrónica.

Detalla sus antecedentes laborales, describe las funciones de Jefe de Departamento, en virtud del Decreto N.° 2198/2014, esto, a casi Diez (10) años desde su dictado.

c).- Agravios concretos: Efectuado el detalle de los antecedentes en los términos del punto precedente, a continuación referiré en forma concreta a cada uno de los agravios esgrimidos por la recurrente:

1.- Que respecto del Decreto 208/2024, se puede advertir la generalización de argumentos utilizados en su fundamentación respecto del personal involucrado -547 agentes-, todos con diferentes circunstancias y características, sin avocarse a cada caso concreto en particular.

2.- Expresa que se apoya como sustento jurisprudencial, citando un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil de Resistencia emitido en el Expte 1849/2020-1-C, que no resulta adecuado ni extensible a su caso, porque viene ejerciendo el cargo y percibiendo haberes normales y habituales por tal cargo jerárquico, desde el año 2014 y hasta la actualidad, y que inclusive existe ejecución,

respecto del Dcto. 3651/23, al percibir sus haberes como Jefe de Departamento durante los meses de diciembre/2023, enero/2024 y febrero/2024, es decir, durante los 3 meses posteriores al dictado del Decreto 3651/23.

3.- Dice que por ello es válido el mismo habida cuenta de haber sido publicado en el sistema de Registro Oficial de Información de Decretos, v.gr. Sistema de Gestión de Trámite – SGT-, ya se encuentra vigente y produce efectos jurídicos para su parte aún sin necesidad de notificación al suscripto, a contrario sensu a lo argumentado en el instrumento recurrido.

4.- Referencia que ya se han generado derechos subjetivos y patrimoniales en su favor, ya que ha percibido los emolumentos que el cargo irroga por los meses posteriores a su publicación en dicho Registro Público el 7/12/2023, periodos 12/23, 1/24 y 2/24, razón por la que goza del efecto de acto administrativo legítimo, estable y válido.

5.- Señala que resulta aplicable al caso de Titularización del cargo de su parte, habida cuenta que el Decreto 3651/2023 ha sido dictado por la Autoridad del Poder Ejecutivo correspondiente, es decir, por el Gobernador de la Provincia, en ejercicio pleno de sus facultades conforme lo establece la Constitución Nacional, con los requisitos formales que el acto debe contener para su legitimidad y validez.

6.- Que ha sido publicado en el Registro Oficial de Decretos y ha generado derechos subjetivos y patrimoniales a su parte, tutelados por la Constitución Nacional, ya que se le vienen liquidando haberes por ejercicio de dicho cargo ya desde el 2014 y durante los últimos Tres (3) meses, desde su publicación el día 7/12/2023, lo que dota al Dcto. 3651/23 de validez, legitimidad, estabilidad y carácter de "acto firme" creador de derechos subjetivos y patrimoniales en su beneficio.

7.- Cita el art. 70 de la Constitución Provincial.

8.- Manifiesta que de ninguna manera se atribuye la acusación de algún tipo de maniobra encubierta para forzar ilegalmente un acto administrativo, irregular, injusto apartándose del derecho para su beneficio, en tal caso niega el haber obrado con mala fe, no existen pruebas para sostener dicho argumento.

II.- Es así, que delimitado el marco recursivo, a continuación se procederá a analizar cada uno de los supuestos agravios invocados:

1- En primer lugar, el decreto, lo agravia en forma directa ya que dejo sin efecto su promoción al cargo de Jefe de Departamento, que subroga, que viene ejerciendo con idoneidad, estabilidad, de manera íntegra e ininterrumpida y con nivel académico universitario suficiente, afectando su estabilidad laboral.

Justificando la designación automática sin concurso considerándolo, como un acto administrativo valido en la medida en que haya sido dictado de conformidad con las normas que regulan su producción y predeterminan su contenido.

En relación a los años de subrogancia justifica su designación automática sin concurso, destacando que desde el 2014 viene subrogando el cargo al cual es promocionado, cargo de Jefe de Departamento. Promoción y titularización que llego por el decreto 3651/23 que fue dejado sin efecto por el decreto 208/24.

Corresponde señalar que el acto que se pretende validar y que fuera nulificado por el decreto hoy cuestionado, fue dictado por el anterior mandatario provincial, reconociendo *"Promociones y titularizaciones"* de cargos correspondientes a Jefaturas de Departamentos y Direcciones, en distintas Jurisdicciones, -en el caso el Ministerio de Seguridad- entre los que se encuentra el recurrente.

Ahora bien, adviértase que el acto administrativo atacado (Decreto 208/24), no sólo cuenta con un detallado desarrollo de los antecedentes fácticos sino también de los fundamentos técnicos jurídicos -existencia de vicios graves en sus elementos esenciales- que determinaron su revocación en sede administrativa, opinión que desde ya se anticipa.

Ello se evidencia del cotejo de las Actuaciones electrónicas incorporadas, donde se evidencia el **tracto abreviado que se impuso al decreto que se pretende restablecer,** toda vez que, según seguimiento de Ruta del SGT, tuvo inicio en fecha 04/12/2023 y finalizó con el dictado del decreto el día 07/12/2023, es decir último día de la gestión saliente. Sin perjuicio de que la claridad del texto reproducido precedentemente nos eximiría de mayores consideraciones, vale dejar en claro que el propio recurrente, en su escrito postulatorio manifiesta: *..."He sido, reitero, designado en el mismo en carácter, primero de subrogante, a través de un instrumento legal idóneo, válido y firme dictado en el año 2014, no me he servido con mala fe del mismo en absoluto para requerir mi titularización de manera antijurídica o viciada, SINO QUE POR EL CONTRARIO, fue la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DEL POER EJECUTIVO – en figura del Sr. GOBERNADOR PROVINCIAL- quién en USO PLENO DE SUS FACULTADES EJECUTIVAS, dispuso la titularización del cargo jerárquico de Jefe de*

Departamento en beneficio de mi parte, y de otros agentes, sin intervención dolosa o viciada de mi parte o de otros funcionarios"..., **de lo que se colige que, no solo reconoce y admite que el procedimiento legal para adquirir la titularidad de un cargo de la estructura, es el LLAMADO A CONCURSO, situación que importa su conocimiento del vicio del acto dejado sin efecto y la consecuente factibilidad por parte de la administración de proceder a SU REVOCACION en dicha sede por conocimiento del vicio.**

Por otra parte, y sin perjuicio que más adelante haré expresa referencia a este punto concreto, lo descripto evidencia el **CONOCIMIENTO DEL VICIO** que el recurrente tuvo del acto dejado sin efecto y consecuentemente la viabilidad por irregular de su revocación en sede administrativa.

En ese contexto, las titularizaciones que se invocan, refieren a una situación específica que implica - violación al procedimiento de selección, evaluación y promoción por concurso que garantice transparencia, participación, igualdad de oportunidades e idoneidad para el desempeño de los cargos a ocupar, nuestros tribunales son contestes en garantizar su cumplimiento - concurso público - como paso previo a cualquier designación en la administración pública.

Este principio inquebrantable, encuentra su fundamento, además en el Artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición de que la idoneidad, principio replicado en el Artículo 23.1 inciso C de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho de todos los ciudadanos "de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país", equivalente asimismo con el Artículo 21 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 25 inciso C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (todos con jerarquía constitucional conforme lo previsto por el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

De esta manera, la Ley Provincial N.° 292-A establece como derecho de los agentes de planta permanente a la carrera administrativa, disponiendo en su artículo 23° inciso 4) *"...que se entiende como el progreso del agente en lo concerniente a ascenso, mejora de función y remuneración dentro de lo determinado por las pautas que fije el escalafón..."*.

El mencionado cuerpo legal dispone en el segundo párrafo del Artículo 7°: *"...En caso de que deban cubrirse cargos de nivel superior se realizará previamente concurso interno de antecedentes y/u oposición para la promoción de los agentes que ya prestan servicios en la administración. Solo si este concurso se declarara desierto podrá llamarse a concurso abierto"*.

Ello es así en virtud a que, en materia administrativa, rige el principio de legalidad y juridicidad, donde la administración debe obrar en el marco de lo legalmente establecido, constituyendo ello –como en el presente caso y régimen del concurso- **facultades expresamente regladas**, que el Estado y mucho menos los funcionarios pueden desconocer.

La violación a la ley (como lo ocurrido por el decreto anulado) ha resultado la premisa determinante para la decisión nulificante adoptada por la máxima autoridad administrativa provincial entrante, fundada no solo en el procedimiento exprés impreso – omitiendo todos los pasos procedimentales respectivos -, ***sino especialmente en la deliberada aplicación al caso de un procedimiento de excepción a la Constitución Provincial; encontrándose involucrados cargos jerárquicos de la estructura orgánica***, generando vicios contundentes tanto en la causa (antecedentes de hecho y derechos invocados) como en el objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Todo lo cual ha sido detallado y fundado en el instrumento recurrido, al cual nos remitimos por razones de brevedad. Lo que desvanece cualquier agravio plasmado por la recurrente.

Pues lo exigido por la norma (a pesar de los antecedentes laborales que mencionara y que los recurrentes acompañan como prueba) no se cumplió, es decir no existió concurso para las titularizaciones, resultando esta y no otra la vía y procedimiento reglado por la normativa aplicable.

Sin perjuicio de ello y en relación al planteo efectuado por el recurrente, constituye una afirmación que falta a la verdad y lo enerva aún; prueba de ello lo han dado la observación de los antecedentes e informes, debidamente desarrolladas en el decreto impugnado. Motivando con constancias concretas y objetivas las nulidades absolutas, advertidas en el instrumento nulificado.

Cabe dejar en claro que la normativa citada y reproducida en su parte pertinente debe ser analizada en forma conjunta con lo establecido por el Decreto N.° 1618/10, motivo por el cual no resulta viable el hecho de que la designación de cargo de Jefe de Departamento, pueda realizarse por resolución y mucho menos obviándose el procedimiento de llamado a concurso.

En este sentido, "...los Llamados a Concursos de Antecedentes y Oposición constituyen la metodología más adecuada dado que permiten mantener la transparencia, participación y cumplimiento de la normativa vigente."; El Decreto N.° 1618/10 que aprueba el Reglamento para el Procedimiento de Concurso para cubrir cargos jerárquicos de Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento, con estructura orgánica y presupuesto aprobado de los organismos de la Administración Central del Poder Ejecutivo, incluye a los entes Descentralizados y Autárquicos y surgió con la finalidad de reglamentar los llamados a concurso en el ámbito de toda la administración pública, resultando dicha

metodología no sólo la idónea, sino fundamentalmente ajustada a la Carta Magna Provincial.

2- Respecto a la transitoriedad y Subrogancia, donde el recurrente formaliza una interpretación o equiparación personal, y a su vez la pretendida no aplicación del fallo Bottini corresponde reseñar lo siguiente.

Al referenciar el recurrente que la decisión adoptada por la máxima autoridad del Ejecutivo Provincial, afecta su carrera administrativa y en una expresión inentendible y que no se advierte del texto del decreto recurrido, indica que *"...tampoco puede invocarse que la transitoriedad o provisionalidad de la subrogancia equipare al empleado público de carrera administrativa con el personal de gabinete, expresión que no sólo no existe, sino que además contravendría con los argumentos legales expuestos precisamente como sustento de la decisión adoptada..."*

Insistimos en nociones básicas del derecho administrativo y de la carrera administrativa en el marco del empleo público, **Subrogancia:** Conforme se hizo expresa referencia en el Decreto cuestionado sobre la figura administrativa de la subrogancia, específicamente a su carácter transitorio y la **inexistencia de un verdadero derecho subjetivo,** es nutrida la jurisprudencia de nuestros tribunales en tal sentido, no sólo en antecedente "Bottini", cuya inaplicabilidad al caso sostiene erróneamente la recurrente, sino que constituye una realidad irrebatible y legalmente irrefutable **su carácter transitorio, sujeta a la apreciación de los órganos competentes.**

Sobre el tema la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa de la Provincia del Chaco tiene dicho: *"...Ahora bien, como reiteradamente venimos sosteniendo, partiendo de la base de que la creación o el mantenimiento de las vacantes y la oportunidad de su cobertura dependen, en los supuesto que ahora se contemplan, de circunstancias en cierto modo aleatorias y sujetas a la apreciación de los órganos competentes,* ***no puede sostenerse que en verdad, y fuera de los supuestos de promoción automática, exista un derecho subjetivo al ascenso y menos aún que el mismo se dé con carácter general, ya que la selección necesaria y la estructura piramidal de la Administración Pública se oponen a ello*** *(Baro Daisy L La relación de empleo público. Astrea. Buenos aires, ps 35/37 ob. Cit. En revista de derecho Público, Empleo Público – 1 2012-1 Pág. 494). El derecho del agente no constituye un derecho subjetivo al ascenso, y así lo ha entendido la procuración del tesoro de la Nación al sostener que la pretensión de los interesados de ser encasillados en categorías superiores no pasa de ser una mera aspiración, sin que resulte un derecho que la Administración se encuentre obligada a satisfacer por no existir*

norma legal que así lo disponga. En esta materia el poder administrador tiene facultades discrecionales (PTN, dictámenes 233:200,261:72; 263:32). ***Bajo esta línea de razonamiento, el desempeño prolongado de un cargo en carácter de subrogante no genera más que una expectativa de ascenso que de ningún modo puede traducirse en el derecho a la designación definitiva, obviando el procedimiento del concurso de oposición y antecedentes que resulta el medio por excelencia para garantizar la cobertura de cargos con personal idóneo. Bajo estas circunstancias, se rechaza la pretensión analizada..."*** ("CACERES ANA GRISELDA C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" Expte. N° 10872/2019-1-A-"), las negritas y subrayado me pertenecen.

El desempeño en carácter de subrogante en un cargo no constituye fundamento suficiente que justifique exceptuar el procedimiento de selección, provocando un trato discriminatorio respecto del resto de agentes que pudieran considerarse idóneos y con derecho a participar del citado proceso selectivo.

Que la designación como subrogante en un cargo superior se enmarca en el ejercicio discrecional de potestades o poderes en cabeza de la Administración Pública, para asegurar la prestación efectiva de un servicio o empleo público de manera transitoria.

Que el mero transcurso del tiempo en el ejercicio de un cargo transitorio no otorga un derecho adquirido a ser designado de manera definitiva, más solamente una expectativa, por cuanto la designación es precaria y realizada de manera discrecional.

En torno al concepto de derecho adquirido, la PTN, ha expresado, que para poder gozar de un tratamiento jurídico específico establecido por un régimen legal o reglamentario determinado, resulta indispensable que exista un derecho adquirido que lo posibilite y, para que tal situación se configure es menester que se encuentren reunidos en cabeza de su titular todos los presupuestos exigidos por la normativa aplicable para que su nacimiento se produzca (conf. Dict. 141:5; 178:1;187:113 y varios otros) -Dictámenes 249:83-.

Que, tratándose de actos precarios, los mismos son esencialmente revocables, toda vez que la débil naturaleza del derecho emergente no permite consolidar una situación jurídica estable (v. Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, T I, Ed. Astrea, 1993, pág. 390 y ss.; Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T II, Ed. Abeledo Perrot. 2000, pág. 291 y 297).

Que la designación como subrogantes de manera transitoria y precaria no puede ser desconocida por los agentes, no sólo por ser de

planta permanente de la Administración, sino también porque ello surge de manera expresa de los Decretos de designación.

La PTN ha dicho: *"Los concursos de selección de personal suponen una valoración comparativa de los méritos de cada uno de los candidatos a los efectos de la adjudicación de los cargos disponibles, materia que en alguna medida, se encuentra librada al criterio de apreciación del órgano competente para resolver (conf. Dict. 193:226; 202:35; 240:47; 269:23)".*

III.- En definitiva, de las constancias obrantes en autos surge una realidad objetivamente distinta y hasta contrapuesta con lo planteado por el recurrente; el dictado del Decreto cuestionado por el Sr. Zalazar, encuentra su fundamento en el análisis pormenorizado y detallado que ha llevado a cabo la Comisión Revisora, en los términos del Decreto 13/23 y Actuaciones electrónicas generadas en consecuencia.

En efecto, para arribar a la conclusión propiciada en el Dictamen N.° 18/24, la Comisión Revisora contó con todos los antecedentes e informes de las dependencias competentes necesarios a tal fin.

Precisamente, dichos antecedentes analizados en función de la normativa aplicable, constituyeron basamento fáctico y jurídico que permitieron advertir los vicios graves que ostentaba el Decreto N.° 3651/23 y que, en definitiva, motivaron su nulidad en los términos del artículo 127° de la Ley N.° 179-A, Código de Procedimientos Administrativos.

Por consiguiente, *podemos concluir con relación a las apreciaciones sobre el fondo de la cuestión,* ***que el recurrente no fue designado conforme a las pautas previstas por la normativa vigente****, toda vez que su ascenso debió efectuarse siguiendo el procedimiento debido para ello, realizándose la designación en cuestión sin el respaldo de un procedimiento de selección.*

La conducta, las pruebas y los argumentos desarrollados por el recurrente, priorizan un interés personal y particular por sobre el general, desconociendo el principio de la legalidad - juridicidad que rige en materia administrativa, pretendiendo defender una posición basada en una ilegalidad, contrariando la normativa aplicable, en manifiesto acto discriminatorio y violatorio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 16° de la Constitución Nacional (igualdad ante la ley) y reproducida en los artículos 69° y 70° de la Constitución Provincial, vicio grave que autoriza a la revocación en sede administrativa (conocimiento del vicio).

A su vez y con criterio compartido, el decreto nulificado no generó derechos subjetivos que estén en cumplimiento, haciendo pasible su revocación en sede administrativa con vista al fiscal, en idéntica interpretación al fallo Bottini, resultando la vía y el procedimiento para su revocación incuestionable.

La existencia de mala fe radicó en este aspecto en que el personal, de tantos años en la administración pública no puede invocar el desconocimiento de las normas y mucho menos del recaudo legal del concurso para acceder a titularizaciones, no obstante ellos siguen insistiendo en hacer rever una situación que ellos mismos reconocen, constituir algo extraño a la misma y en insistir que se consolide una situación que quebranta no solo la norma que lo regula (al concurso) sino que también a todo el ordenamiento constitucional y convencional citado; y en este punto me remito a lo expresado más arriba en relación al reconocimiento expreso que el recurrente efectuó en tal sentido en su pretensión recursiva y a las que me remito a fin de no incurrir en reiteraciones inoficiosas.

En concreto, la mera declaración dictada por el órgano de manera ilegal con el objeto de reconocer un derecho, no implica que el acto sea plenamente válido y en consecuencia irrevocable, más aún cuando como en el supuesto que nos ocupa, no hubo efectivo cumplimiento o goce del derecho (criterio sostenido en caso análogo de transferencia y promoción directa sin respetarse el procedimiento reglado en la causa "BOTTINI ARIEL ALEJANDRO C/ INSTITUTO DE CULTURA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ ACCION DE AMPARO" Expte. Nº 1849/2020-1-C, en sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala Cuarta).

Que las titularizaciones ordenadas en el acto administrativo en análisis no fueron registradas en Sistema PON, es decir que los agentes involucrados nunca percibieron sus haberes como titulares y mucho menos se les reconoció como titulares. Continuaron percibiendo sus haberes con subrogancia, sin manifestar cuestionamiento u observación alguna en su oportunidad, sin variar ni generar derechos distintos a los anteriores al decreto, en crisis.

Respecto al material probatorio aportado por el recurrente, el mismo ha sido considerado y evaluado a los fines de resolver esta presentación, mas no resultan suficientes como para modificar la convicción que sobre el caso concreto tuvo la Comisión Revisora y que motivó el dictado del Decreto recurrido.

Por el contrario, entiendo que existen elementos fácticos y jurídicos que avalan la legalidad y legitimidad del decreto atacado.

La carrera administrativa debe contemplar la aplicación de criterios que incorporen principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera administrativa, basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia y rendimiento laboral y de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, resultando necesario

la implementación y acatamiento de los proceso correctos de selección, en miras a promover el respeto, entre otras cosas a la ética pública, la igualdad de oportunidades y la carrera administrativa de todos los agentes públicos.

En este orden de pensamiento, si se atribuye estabilidad y/o promoción a quien no han sido escogido con los requisitos y medios de selección previstos por los cánones vigentes, no solo se estaría trastocando el régimen previsto por la normativa local, sino que se vulnera el derecho a la carrera administrativa, derecho otorgado por los mandatos de la ley de procedimiento provincial a cada agente del sector público.

Sostener la conclusión contraria, es decir, la imposibilidad de dejar sin efecto la designación en cuestión, vulneraría el régimen legal de la función pública, toda vez que el sistema de concursos resulta el principio general en lo que concierne a ingreso y promoción en materia de empleo público que fluye del artículo 16° de la Constitución Nacional.

Sobre el tema nuestro máximo Tribunal Provincial ha dicho: "...La doctrina ha señalado que las pautas que se deben cumplir para acceder a los puestos públicos debían ser "de tal naturaleza que excluyan cualquier privilegio, y que puedan ser satisfechas por todos los habitantes de la Nación por su esfuerzo propio o por el transcurso de los años (Montes de Oca M., Lecciones de derecho constitucional" Lib. "La Buenos Aires" Buenos Aires, 1902, t.I, p. 305). Es que la especificación de la idoneidad, aparte de inspirarse en el bien común, "quedará a salvo en cuanto no importe crear exclusiones y privilegios, ni distinciones arbitrarias que afecten el plano de igualdad en que se pretende colocar a todos los habitantes" (Casiello, Juan P. "Derecho Constitucional", ed. Perrot, Buenos Aires, 1954, p. 318).

De acuerdo con lo expuesto, el Decreto DEC-2024-208-APP-CHACO hoy cuestionado, es coherente con las normas constitucionales y convencionales citadas, en particular con los Tratados sobre la Lucha contra la Corrupción que incluyen preceptos sobre formas de selección y ascensos de los empleados públicos sobre la base del mérito y capacidad. Por otro lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1997 (aprobada por ley nacional 24.759), determina que *los Estados Partes deben "crear, mantener y fortalecer (...) sistemas para la contratación de funcionarios públicos (...) que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas (art. III, inc. 5).* Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (aprobada por ley nacional 26.097) establece que *cada Estado Parte adoptará sistemas de contratación y promoción "basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como mérito, la equidad y la aptitud" (Cfr. Sagues, Néstor, "Sobre la reglamentación del principio constitucional de idoneidad, La Ley 1980-C-1216 TR La Ley AR/DOC/15146/2001)..." STJ, Sala Contencioso Administrativa autos*

caratulados: "RODRIGUEZ LEONARDO MARTIN C/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" Expte. N° 10602/19-SCA.

Sin lugar a dudas, en el decreto dejado sin efecto, se advierten nulidades en todos los elementos del acto, lo que lo tornan nulo de nulidad absoluta en atención a la ausencia total de motivación, en virtud a la falta de invocación de hechos o antecedentes concretos, los que no constituyen fundamento alguno para exceptuar régimen legal o la aplicación de un procedimiento de selección en el que prime la idoneidad.

Por lo que no quedan dudas que el decreto recurrido DEC-2024-208-APP-CHACO no solo cumple con los elementos esenciales para tornarlo valido y eficaz, sino que a su vez fue dictado en pleno ejercicio de potestades propias de la misma administración, en función a lo acreditado y regulado a su vez por el art. 127 de la ley 179-A.

Es de destacar, que la administración ha actuado en el marco de la normativa aplicable y por sobre todo en el ejercicio de un deber de " ... proveer a la gestión directa e inmediata del interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad"(PTN Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto. Expte. N°023/523/00, publicado en E.D., suplemento de derecho administrativo del 31/05/01).

De todo lo expuesto resulta claro e inequívoco, que el agente Zalazar, dada su antigüedad como agente de planta permanente de la administración pública, y, conforme su nivel académico universitario –Abogado-, conocía la normativa que rige la función pública, no pudiendo invocar el desconocimiento de las irregularidades, vicios e incumplimientos de los procedimientos de promociones de las que estaba siendo parte.

Con relación a lo antes mencionado, la Ley 179-A dispone en su artículo 127°: "Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable por el procedimiento judicial establecido en el artículo 128, *salvo que el vicio hubiere sido conocido por el interesado, en cuyo caso se podrá proceder a su anulación de oficio en sede administrativa, en la forma en que se indica en el artículo siguiente*".

Que la primera parte del artículo mencionado establece la inmutabilidad del acto regular en sede administrativa, salvo "...si el interesado hubiere conocido el vicio...", es decir que el conocimiento de la anomalía por parte del administrado o interesado faculta a la administración a revocar el acto de oficio en sede administrativa.

En ese sentido la Doctrina nos ilustra señalando que *"...es suficiente para habilitar el accionar anulatorio oficioso el mero y simple*

conocimiento del vicio por el administrado- o la exigencia razonable de ese conocimiento- sin que sea menester por tanto, que aquel haya sido causado por el administrado." (Comadira Julio Rodolfo, El Acto Administrativo -Configuración del conocimiento del vicio- Ed. La Ley pag. 215, ed.2011).

Que al respecto, resulta oportuno destacar que no puede alegarse buena fe por parte del agente recurrente por un acto irregular, por cuanto reviste en la planta permanente de la Administración Pública, sumado a los antecedentes de hechos expuestos, la ausencia de concurso interno de oposición y antecedentes, hacen que no pueda desconocer en base a la magnitud de los vicios expuestos que surgen evidentes y ostensibles, que está accediendo de manera irregular a un cargo superior, y con ello afectando al subrogante en ejercicio, y es lógico que la Administración pueda anular la designación por conocimiento del vicio. La jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del caso "Almagro" (Fallos: 321:169, 1998) lo habilita.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación y la doctrina, han esbozado su análisis alrededor del instituto del conocimiento del vicio, teniendo siempre en miras su compatibilización con los valores y principios del Estado constitucional social de derecho vigente en la República. Que, a su vez, también hizo eco, por un lado, del grado de evidencia del vicio en cuestión, al dictaminar que el conocimiento se presume cuando el vicio sea manifiesto, al contrastar el acto viciado con el orden jurídico (Dictámenes 249:547 y 249:324).

Intervención del Fiscal de Estado: La Comisión Revisora, a los fines de garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los pasos procesales exigidos por el ordenamiento jurídico, dada la situación particular del caso – agentes notificados del acto nulificado – solicitó la intervención legal del Fiscal de Estado en su carácter de órgano constitucional con atribuciones de control de legalidad de los actos del Estado-, quien en la oportunidad, en función a los antecedentes fácticos y jurídicos soportes del proyecto de decreto (Dictámen de la Comisión Revisora), se expidió - Dictámen N.° 31/24 – ***"...en los términos de que el Decreto 3651/23 colisiona con las normas legales vigentes y aplicables al caso, resultando pasible de los vicios que se le endilgan, convirtiéndolo de esta forma en un acto administrativo irregular; nulo de nulidad absoluta, que debe ser revocado en sede administrativa; ...todo ello en armonía al contenido normativo expuesto por los Artículos 127 y 128 de la Ley N° 179-A".***

La contundencia del dictamen emitido por la mencionada autoridad constitucional, nos exime de mayores consideraciones.

Ergo, del análisis de todos los fundamentos brindados por el recurrente, de los antecedentes ponderados y de las pruebas corroboradas, se advierte que la queja formalizada, *lejos de revestir carácter de verdaderos agravios, entendidos como crítica razonada y fundada de la decisión cuestionada,*

Gobierno del CHACO

DM

simplemente constituyen meras manifestaciones de disconformidad o desacuerdo, pero de manera alguna alcanzan la solvencia jurídica necesaria para ser considerados como tales.

En este punto, debemos recordar que es criterio reiteradamente sostenido por *La Corte Suprema quien ha dicho, referenciando a agravios y/o planteos recursivos "... que no bastan en consecuencia escuetos argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél" ("Fallos"323:2131).- De la lectura del libelo impugnaticio se advierte que apelante se abstrae de las constancias de autos, limitándose a emitir meras apreciaciones personales, sin rebatir eficazmente los fundamentos de la resolución apelada.*

IV.- Conclusión: Como corolario de lo expuesto, y teniendo en cuenta el marco de competencia del Poder Ejecutivo Provincial para entender en el planteamiento recursivo, esta Asesoría General entiende que el acto administrativo atacado cumple con la totalidad de los recaudos técnicos jurídicos que lo tornan legítimo (legal y razonable) y ejecutorio.

Efectivamente, ha contado con adecuado sustento en los hechos que le sirven de causa y del derecho aplicable; no logrando – los argumentos esgrimidos por el recurrente- desvirtuar lo decidido en dicho acto y mucho menos enervar sus consecuencias jurídicas; resultando sus argumentaciones meras disconformidades sin solvencia jurídico legal suficiente para ser considerados como verdaderos agravios tal como se expuso en el numeral específico, razón por la cual corresponde rechazar el Recurso Jerárquico y/o Revisión incoado por el Sr. Zalazar contra el Decreto DEC-2024-208-APP-CHACO, manteniendo plena vigencia.

No obstante lo aquí opinado, deberá tenerse presente que el Art. 13 de la Ley N.° 2108-A enuncia: "*Los dictámenes, vistas, informes legales u opiniones jurídicas que emita la Asesoría General de Gobierno, no son vinculantes para la repartición u organismo requirente".*

Atentamente.

ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO,

MARIA FERNANDA KNIAZ
SECRETARIA LETRADA
ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO

25 OCT. 2024